

Santiago, trece de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En autos RIT O-428-2022 seguidos ante el Juzgado de Letras de Colina por sentencia de cuatro de marzo de dos mil veinticuatro, se rechazó la demanda de despido indirecto y nulidad del despido interpuestas por el actor, declarando que la relación laboral terminó por renuncia del trabajador, sin costas.

Contra esa sentencia, recurrió la parte demandante, esgrimiendo, como causal principal la del artículo 477 segunda parte del Código del Trabajo y en subsidio la contemplada en el artículo 478 letra b) del mismo texto legal, pidiendo la anulación del fallo y la dictación de uno de reemplazo que acoja la demanda en todas sus partes, con costas.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su conocimiento en la audiencia respectiva, oportunidad en que alegaron los abogados de ambas partes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso se basa, primeramente, en la causal contemplada en el artículo 477 segunda parte del Código del Trabajo, es decir, por infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Sostiene, en primer término que se habrían infringido los artículos 1, 7, 8, 160 N°7, 163, 171 y 420 del Código del Trabajo, los artículos 71 y 78 de la Ley N°19.070 del Estatuto Docente y el artículo 19 N°2 Constitución Política de la República, lo cual habría ocurrido en el considerando séptimo de la sentencia, al desconocer la aplicación del autodespido a los trabajadores docentes, y que al no considerarlo así sería discriminatorio, debiendo aplicar el principio protector, regla *“in dubio pro operario”*.

Ataca por impertinente la sentencia de la Corte Suprema citada por el fallo impugnado al decir relación con otra materia y cita jurisprudencia en recursos de unificación de jurisprudencia que reconocen la aplicabilidad del auto despido y la nulidad del despido a los docentes.

Respecto al inicio de funciones del demandante, sostiene que se habrían infringido los artículos 5, 7, 8 inciso 1°, 9 inciso 1°, y 10 N°1 del Código del Trabajo, los artículos 71, 72, 78, 79 letra d), y 82 de la Ley N°19.070 Estatuto Docente.

Indica que la sentencia impugnada desconoce la antigüedad laboral del



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GTBXXUXUXWM

trabajador, determinando de forma totalmente ilegal, así como arbitraria, que la relación laboral del demandante se habría iniciado recién el 31 de enero de 2015, a pesar de que la misma reconoce que según la prueba aportada por las partes, el actor se desempeñaba como docente desde el 15 de marzo de 2010 para la Corporación de Desarrollo Social de Lampa.

Afirma que la circunstancia de que el trabajador haya tenido varios contratos a plazo fijo y que recién en el año 2015 obtuviera la titularidad de sus horas, no implica que sólo desde esa fecha comenzó su relación laboral de carácter indefinido con la demandada.

Respecto a la nulidad del despido, sostiene que se infringe el artículo 162 del Código del Trabajo.

Indica que la sentencia, en su considerando sexto, señala que no existirían cotizaciones previsionales ni de salud del trabajador impagas, esto según los oficios y certificados acompañados al proceso; sin embargo, reconoce que, existen diferencias de pago de las cotizaciones enteradas en la entidad previsional, pero como éstas únicamente serían respecto de las comisiones de la Administradora de Fondos de Pensiones, esto no tendría relevancia, porque quien se vería perjudicada, sería dicha entidad. Sin embargo, omite que estas comisiones deben ser pagadas con los montos que fueron descontados de la remuneración del trabajador, es decir, su empleadora, de modo que la demandada se adueñó de manera ilegítima de cantidades que le fueron descontadas al demandante de su remuneración, cuestión que no sólo perjudica a la entidad previsional, sino que también al trabajador.

Refiere que, en este caso, habiéndose acreditado que, al momento del despido, la demandada había incumplido gravemente las obligaciones que impone el contrato del trabajo al no haber realizado el pago íntegro y oportuno de las cotizaciones previsionales del trabajador, al no haberse realizado su pago de manera íntegra, y además reconociendo la sentencia de que estas fueron pagadas en su gran mayoría fuera de plazo legal, se habría verificado el incumplimiento grave que establece el artículo 171 del Código del Trabajo, para que proceda el auto despido justificado del trabajador, así como la nulidad del despido.

Afirma que, en cuanto a si el no pago de las cotizaciones previsionales de manera íntegra, da lugar a la sanción de nulidad de despido, es decir, la situación en la que también se encuentra el trabajador, en donde se le



descontó de su remuneración una suma mayor de la que de forma posterior le fue enterada en la respectiva AFP, la Excm. Corte Suprema en recurso de unificación de jurisprudencia N° 7.761-2019, de fecha 29 de agosto de 2019, se ha pronunciado en el sentido de resolver que, cuando se pagan cotizaciones previsionales a un trabajador, basándose en una remuneración menor a la que realmente percibía, procede la sanción que establece el artículo 162 del Código del Trabajo, debiendo condenar al demandado, al pago de las remuneraciones hasta la convalidación del despido.

Respecto al ius variandi del empleador, sostiene que se infringen los artículos 42 inciso 1°, 22, y 36 de la Ley N° 19.070 y artículo 12 del Código del Trabajo.

Afirma que en el considerando quinto el sentenciador establece que en virtud de las declaraciones de testigos de las partes, al trabajador efectivamente se le cambió de funciones, para desempeñarse finalmente en el Liceo de Batuco, pero como profesor de educación física de alumnos de enseñanza básica, no de enseñanza media como establecía su contrato de trabajo, y que esto significa una disminución en su remuneración.

Indica que si bien el empleador puede determinar el cambio de funciones o del lugar de trabajo de un trabajador, esto por la facultad de mando que posee de conformidad a la ley, estos cambios no pueden significar de forma alguna un menoscabo ni perjuicio para el trabajador; y en este caso, los trabajadores docentes según dispone de forma expresa el artículo 42 del Estatuto Docente, este cambio deberá obedecer a la fijación o adecuación anual de la dotación practicada según el artículo 22 de dicho cuerpo normativo, y al plan de desarrollo educación municipal; en este caso, esta circunstancia no fue ni alegada, ni menos probada en autos, y el tribunal en su sentencia simplemente la omite, porque el cambio de funciones del trabajador no se basó en ninguna de estas normas legales.

En este orden de ideas, señala que el primer límite para el ius variandi, será entonces la naturaleza de las cláusulas a modificar, pues este sólo se debe ejercer para modificar elementos no esenciales de la prestación de trabajo.

Respecto del año lectivo, sostiene que se habrían infringido los artículos 1°, 72, 87 de la Ley N°19.070 estatuto docente, y los artículos 2 y 168 inciso 4° del Código del Trabajo.

Afirma que en este caso, la infracción de las normas citadas es simple,



y se produce porque la sentencia considera que el pago del año lectivo que se encuentra establecido en el artículo 87 del estatuto especial citado, no se aplica al trabajador porque su relación laboral terminó por su renuncia, sin embargo, al no considerar que el trabajador se auto despidió por incumplimiento grave de la obligaciones que impone el contrato de trabajo, según dispone el artículo 168 inciso 4° del Código del Trabajo, implica que el contrato de trabajo, finalizó por necesidades de la empresa, haciendo aplicable el pago del año lectivo que establece el artículo 87 del Estatuto Docente.

En subsidio, se invoca la causal del artículo 478 letra b) del Código del ramo, argumentando el recurrente que en este caso, la vulneración de la apreciación de las normas de la sana crítica, que comprenden los principios de la lógica, las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados y la fundamentación de las sentencias.

El primero, por haberse determinado en la sentencia que, en este caso las cotizaciones previsionales del trabajador se encuentran pagadas por parte de la demandada, a pesar de haber reconocido en la misma sentencia que, estas no fueron pagadas de manera íntegra; es decir, se habría desplegado por la demandada la conducta que justifica el auto despido en los términos del artículo 171 del Código del Trabajo.

En segundo lugar, por cuanto, se consideró como inicio de la relación laboral del trabajador, el 31 de enero de 2015, cuando de la prueba rendida en autos, como lo es el contrato de trabajo de fecha 15 de marzo de 2010, comenzó la relación laboral el trabajador con la demandada la Corporación de desarrollo social de Lampa.

En tercer lugar, por cuanto se consideró que la demandada no había hecho un uso ilegítimo del ius variandi.

En cuarto y último lugar, en este caso, se han vulnerado las normas de la sana crítica al determinar que no se aplica el auto despido a los trabajadores docentes.

SEGUNDO: Que son antecedentes de la causa a considerar los siguientes:

1.- Las partes se vincularon a través de diversos contratos de trabajo para “Docente a Contrata, a plazo”, a partir del año 2010 el primero, al que se le puso término mediante finiquito de las partes en el año 2011, suscribiéndose otros con posterioridad.



2.- El 2 de marzo de 2015 las mismas celebran contrato de trabajo en que el actor pasa a ser docente titular el 2 de marzo de 2015 en cuya cláusula primera se señala que por efecto la Ley 20.804 de fecha 31 de enero de 2015, el actor pasa a ser parte de la dotación comunal de los establecimientos pertenecientes a la Corporación Municipal de Lampa, obteniendo la titularidad al cargo de Docente de Aula.

3.- La relación laboral entre las partes se transformó en indefinida, a partir del 31 de enero de 2015, oportunidad en que por efectos de la Ley 20.804, el actor pasa a integrar la dotación docente de la Corporación de Lampa, en calidad de titular y que en ese contexto, las partes celebraron el 2 de marzo de 2015, Contrato de Trabajo Docente Titular para prestar funciones docentes en los establecimiento de la Corporación de Lampa con 34 horas cronológicas semanales, la que por anexo de 2 de marzo de 2020, pasaron a 42, aceptando expresamente *“ser traslado a otro local o establecimiento, dentro del ámbito territorial de la comuna, cuando las necesidades así lo exijan”*, cláusula que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 42 del Estatuto Docente.

4.-El 1 de marzo de 2021, las partes suscribieron anexo de contrato en virtud del cual, el actor se desempeñaría en el Liceo Municipal Bicentenario Batuco desde el 1 de marzo de 2021 hasta 28 febrero 2022, por lo que, a partir del 1 de marzo de 2022, el demandante solo tenía derecho a exigir a la demandada, prestar servicios de Docente de Aula Titular de educación física, en cualquier establecimiento educacional de la comuna de Lampa, administrado por la demandada.

5.- El demandante puso término a la vinculación que tenía con la demandada, mediante comunicación de despido indirecto en la que invoca el incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato, esgrimiendo dos tipos hechos: i) no pago íntegro de las cotizaciones previsionales en AFP e Isapre del actor y ii) modificación arbitraria, injustificada, unilateral y sin previo aviso, a partir de 1º de marzo de 2022, del lugar y establecimiento donde debía prestar sus funciones.

6.- A la época de término de la relación laboral las cotizaciones previsionales y de salud se encontraban pagadas por la demandada.

7.- El demandante continuó prestando sus servicios en el Liceo Bicentenario, no modificando, en definitiva, la demandada el lugar y establecimiento educacional en que debía hacerlo.



TERCERO: Que el fallo impugnado rechazó la demanda deducida por considerar que la demandada no incurrió en los incumplimientos a las obligaciones en que el actor fundó su acción de despido indirecto. En este sentido, concluye que al encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales y de salud del mismo no podía concluirse tal incumplimiento ni menos darse lugar a la aplicación de la sanción de nulidad prevista en el artículo 162 inciso 5° del Código del Trabajo, no obstante que existieran en tres meses diferencias por pago de comisiones a la AFP al corresponder el cobro de éstas a la referida entidad previsional. Además, considera el juzgador inaplicable el instituto del auto despido por no encontrarse contemplado en el estatuto especial de la Ley N°19.070, que regía la relación entre las partes; teniendo por concluida tal vinculación por renuncia del trabajador, conforme a lo estatuido en la letra a) del artículo 72 de dicho texto legal, por tratarse esta causal, la que más se asimila a la declaración unilateral del actor, de ponerle término.

También descarta los incumplimientos atribuidos por el demandante en relación al cambio de lugar de trabajo, en razón de que no se le comunicó formalmente de ningún traslado y que en todo caso, este no se llevó a cabo, restándole gravedad y perjuicio de esto para el docente.

Asimismo, de desestimó la pretensión del actor en orden a que se pagara el año lectivo, prevista en el artículo 87 de la Ley N°19.070 por estimarla improcedente, atendido que al no verificarse el motivo de despido indirecto, el término de la relación laboral se produjo por renuncia del demandante.

CUARTO: Que, la causal del artículo 477 del Código de Trabajo sobre infracción de ley, tiene como finalidad velar por una correcta aplicación del derecho a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos tenidos por probados.

Por lo mismo, esta causal, en su segunda hipótesis, supone la aceptación de los hechos establecidos en la sentencia, por lo que la fundamentación y sustento del recurso por este motivo debe ser coincidente con ese propósito.

Del mismo modo, no es factible a través de esta causal impugnar el raciocinio valorativo que ha efectuado la sentencia de los medios de prueba



aportados en el juicio, desde que esta apreciación incide en la determinación de los hechos de la causa, lo que –como ya se dijo- es ajeno al objetivo de la infracción de ley.

Asimismo, el recurrente debe indicar qué modalidad de infracción de ley es la que concurre en la especie: contravención formal de la norma, falta de aplicación de la misma, aplicación indebida o errada interpretación de la ley.

Por último, es necesario tener presente también que las normas que se denuncian como infringidas deben tener influencia en lo dispositivo del fallo, esto es, deben revestir el carácter de ser decisoria litis.

QUINTO: Que, de esta última perspectiva, cabe señalar que la discusión o planteamiento jurídico que la recurrente cuestiona respecto del primer acápite del motivo de infracción de ley que denuncia, carece de la influencia sustancial que se requiere puesto que aun cuando se aceptara la procedencia del instituto del auto despido y de la nulidad del mismo para los trabajadores regidos por el Estatuto Docente, lo cierto es que el fallo impugnado descartó que en el caso sub lite se cumplieran con los presupuestos fácticos afines al incumplimiento de las obligaciones por parte del empleador en que sustentó su acción de despido indirecto el demandante, consistente en la existencia de deuda previsional a la época del término de la vinculación laboral y el cambio de funciones y lugar donde debía desempeñarlas; lo que hace inviable la aplicación de la tesis planteada. La misma consecuencia resulta para la determinación de la fecha de antigüedad reconocida al trabajador en el fallo atacado, puesto que por el fundamento dado en el mismo en orden a la improcedencia del motivo de terminación unilateral invocado por éste, no resulta procedente el pago de las indemnizaciones por este concepto reclamadas, careciendo de relevancia la duración de la relación laboral propiamente tal.

De este modo y como se indicó, es inútil por esta causal de nulidad intentar cambiar o modificar los hechos establecidos en el juicio y, en lo que se ha reproducido en los considerandos precedentes, es posible inferir que en caso alguno existe concordancia entre esos hechos con aquellos que requerirían las proposiciones de la recurrente en su arbitrio en cuanto a la existencia de cotizaciones impagas para dar lugar a la sanción de nulidad del despido y/o de la alteración de funciones o lugar a desempeñar los servicios, lo que conlleva al rechazo del recurso impetrado.



Por otra parte, no puede dejar de señalarse en cuanto a los incumplimientos de las obligaciones laborales atribuidos a la demandada, que el cuestionamiento que al respecto formula el actor, implica una crítica a la labor realizada por el juzgador en tanto no asigna a los hechos y conducta de la demandada la calificación de gravedad y suficiencia que permitan tener por configurada la causal de despido que invocó, lo que es propio de otro motivo de nulidad. En efecto, la sentencia estima que el hecho que las cotizaciones previsionales y de salud se encontraran pagadas al momento del despido y que únicamente existieran en tres meses diferencias en pagos de comisión de AFP, no tenían la suficiencia necesaria para los efectos pretendidos por el demandante.

Por último, debe descartarse la infracción atribuida al sentenciador de base de no dar lugar a la pretensión de pago del año lectivo al demandante, puesto que ello no resulta procedente, atendida la forma por la que se tuvo por concluida la relación laboral entre las partes, esto es, renuncia del trabajador.

SEXTO: Que la segunda causal de nulidad invocada en forma subsidiaria, es la prevista en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, la que atañe a la revisión de las razones que sustentan la motivación probatoria y la subsecuente fijación de los hechos que se han tenido por probados, cuando en esa actividad se cometen yerros que suponen contrariar los parámetros de la lógica, de la técnica, de los conocimientos científicos o de las reglas de experiencia. Expresado en otros términos, de lo que se trata es de fiscalizar que las razones vertidas por el juzgador respeten esos lineamientos o directrices.

SÉPTIMO: Que acorde con la norma citada, se sigue entonces que la labor del recurrente consiste en precisar los motivos que reprueba y, enseguida, demostrar la manera en que se contrarían los lineamientos indicados. Sin embargo, a la luz de lo precisado, cabe subrayar que los cuestionamientos de este no se ajustan a esas exigencias, dado que su reproche se dirige más bien a denunciar una disconformidad con las razones que entrega la sentencia para sustentar su dictamen sobre la base del proceso de apreciación de la prueba que realiza. En síntesis, el demandante alude en su arbitrio a que el juzgador desatiende los principios y reglas de la sana crítica, sin embargo, tal denuncia se plantea en forma genérica, sin la debida explicación y demostración de cómo se produce esto en el fallo que



ataca, no pudiendo desprenderse por lo demás una conculcación en tal sentido y de la entidad que se requeriría para entrar a revisar y modificar el proceso de apreciación realizado por el juzgador de base, en uso de sus facultades.

Por otra parte, cabe señalar que como se desprende de los propios motivos que transcribe del fallo atacado, el juez de la causa expuso los razonamientos que la llevaron a la determinación cuestionada, cumpliendo así con lo previsto en el inciso segundo del artículo 456 del Código del Trabajo.

Además, de lo dicho, se infiere que se ha deducido, en forma encubierta, un recurso de apelación y que lo pretendido es que se realice una nueva valoración de la prueba documental y testimonial que cita, acorde a la posición jurídica que sustentó el demandante en el juicio, lo que se aleja de la naturaleza del recurso en estudio.

OCTAVO: Que, conforme a lo razonado, el recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 477, 478 letra b), 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, **se rechaza**, sin costas, el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia de cuatro de marzo de dos mil veinticuatro, dictada por el Juzgado de Letras de Colina, en los autos RIT O-428-2022, sentencia que, en consecuencia, no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redactado por la ministra Carolina Brengi Zunino.

No firma la ministra (s) señora Villegas, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por haber cesado funciones de suplencia.

Ingreso Laboral-Cobranza N°1031 - 2024



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GTBXXUXUXWM

Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Carolina S. Brengi Z. y Ministro Suplente Daniel Eduardo Aravena P. Santiago, trece de mayo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a trece de mayo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GTBXXUXUXWM